



TOLVANERA
ROBERTO
ZAMARRIPA

robertozamarripa2017@gmail.com



La oposición se llena la boca de reclamos contra la corrupción. Pero sus líderes no han aclarado sus malas cuentas.

Los corruptos

La Secretaría de Desarrollo Urbano (Seduvi) de la CD-MX reportó que en la alcaldía Benito Juárez unos 130 edificios habitacionales fueron construidos ilegalmente en los últimos 10 años con 800 departamentos irregulares que, sumados, significan 264 niveles excedentes.

El valor económico de esas construcciones ilegales sería de 7 mil 142 millones de pesos.

El inicio de estas construcciones ilegales ocurrió entre el 2012 y 2015 cuando el jefe delegacional era Jorge Romero, panista desde joven y hoy coordinador de los diputados federales blanquiazules. Según el reporte del gobierno capitalino, en la gestión de Romero se construyeron ilegalmente 27 inmuebles con 68 niveles excedentes. Entre 2016 y 2018 las construcciones ilegales fueron 58 con 118 niveles excedentes. El jefe delegacional en ese periodo fue Christian Von Roehrich, del mismo grupo político de Romero, un aficionado al equipo América de fútbol, a quien le gusta el golf y es admirador de Batman.

Conforme el reporte dado el pasado viernes 2 por el titular de Seduvi, Carlos Ulloa, las tres principales irregularidades detectadas son: la violación al uso del suelo (exceso de niveles y viviendas); autorizaciones fuera de norma, y la omisión en la supervisión de las obras.

Las consecuencias han sido la

incertidumbre jurídica respecto a la propiedad (con la imposibilidad para propietarios de vender o transferir su departamento) y la afectación en la prestación de servicios (agua, gas, luz, drenaje).

Según las pesquisas administrativas y penales, dirigentes políticos afiliados al PAN no solo autorizaron la construcción ilegal de departamentos, sino que se beneficiaron de varios de ellos. La construcción ilegal de esos edificios implicó una asociación delictiva entre constructores que tenían conocimiento de la irregularidad de los inmuebles; de funcionarios que lo autorizaron y protegieron; de notarios que lo avalaron. Timaron todos a miles de compradores que ahora tienen en vilo sus propiedades.

El tema adicional es el uso del dinero recibido que no fue solo para enriquecimiento personal ilícito sino para el financiamiento político de campañas, algo que debiera investigarse en instancias electorales.

Un edificio de la colonia Narvarte, por ejemplo, fue construido en el 2012 con una fusión de predios autorizada ilegalmente. Conforme una resolución de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), del 30 de noviembre de 2012, la construcción no tenía autorizaciones de demolición y menos de edificación de seis niveles. El permiso para la construcción de viviendas en la Narvarte era el H4/20/A (Habitacional de

un máximo de cuatro niveles con 20 por ciento de área libre y densidad alta de una vivienda por cada 33 metros cuadrados de terreno).

La PAOT (según el expediente SOT 1067) urgió a la delegación

Benito Juárez a imponer medidas de seguridad y sancionar a los responsables de la ilegalidad asunto que evidentemente no ocurrió. El edificio se construyó en 6 niveles, no en 4. Los 23 departamentos se vendieron en un promedio de 3 millones de pesos y los propietarios fueron citados a recoger sus escrituras en el verano del 2013 en un evento masivo en la delegación Venustiano Carranza (no en la Benito Juárez donde estaba asentado el inmueble) para llenar un auditorio en una ceremonia de jornada notarial promovida por las autoridades capitalinas.

Otro jefe político partidista, el priista Alejandro Moreno Cárdenas, está acusado de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. *Reforma* publicó el 8 de julio de 2019 una de las mansiones que construyó Moreno con un valor estimado de 46 millones de pesos sin justificación de sus ingresos. Ahora la Fiscalía de Campeche y la FGR han enderezado pesquisas en su contra.

Estos líderes (Romero, Von Roehrich, Moreno) podrían aclarar sus responsabilidades no solo por el bien de la credibilidad de sus grupos políticos (es asunto de ellos) sino por su responsabilidad pública



PERIÓDICO	PÁGINA	FECHA	SECCIÓN
	9	05/12/2022	ARTÍCULOS Y COLUMNAS

ante la ciudadanía.

Morena juega con el castigo político a priistas y panistas como parte de una estrategia política. El mero amedrentamiento parece una venganza y no un acto de justicia. Si son culpables que se les castigue. No hay margen para el jugueteo o la extorsión.